



Julián, de 26 años, parado de larga duración, ahora trabaja de camarero. / KIKE PARA

Trabajo para los olvidados

La crisis sitúa a un millón de personas al borde de la exclusión en Madrid. Las entidades sociales ven más difícil que nunca ayudar a los colectivos desfavorecidos

LOLA HIERRO
Madrid

Un spa en el corazón de Madrid. Luz suave, velas, temperatura cálida, aceites aromáticos, el murmullo del agua que cae de un surtidor, cerámica y maderas... Un templo del bienestar donde el silencio es tan importante como en un monasterio. Abdu, maliense de 23 años, y Anna Ewa, polaca de 19, se mueven con sigilo: son conscientes de la importancia de estar relajados para transmitir lo mismo. Ambos son empleados del centro de masajes Masvital y han escapado de la terrible estadística: en la Comunidad de Madrid, el 13,6% de la población vive bajo el umbral de la pobreza y más de un millón de personas —un 18%— se encuentra en situación de exclusión social, según datos del Observatorio de Exclusión y Procesos de Inclusión en la Comunidad de Madrid (OEISM).

Los resultados de este organismo, en el que participa la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Complutense y entidades sociales como la Fundación Atenea o Secretariado Gitano, superan por unas pocas décimas a los ofrecidos en 2010 por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), que se basan en el indicador europeo de riesgo de pobreza y/o exclusión (AROPE). Este indicador incluye hogares con rentas inferiores al 60% de la media nacional, privación del consumo de al menos cuatro de nueve bienes y servicios determinados, y escaso nivel de empleo entre los miembros de una familia.

Ewa llegó a Pinardi, una entidad social dedicada a ayudar a jóvenes en riesgo de exclusión, con 12 años. “En casa había proble-

mas y mi madre me dijo que allí me ayudarían con los estudios”. Abdu aterrizó con 18 en Madrid completamente solo. “Un amigo me recomendó ir a Pinardi; allí me enseñaron español y más cosas”, relata. Ambos completaron unos cursos de educación básica y luego optaron por formarse en estética y peluquería. Después, tocaba integrarlos en la sociedad con la herramienta más poderosa: un empleo. Por suerte, llegaron las prácticas en Masvital y luego el ansiado contrato de trabajo. “Pinardi proporciona apoyo educativo, familiar y psicológico, pero la inserción laboral es el últi-

Cifras de un drama

► El 13,6% de la población de la región, con seis millones y medio de habitantes, vive bajo el umbral de la pobreza. El 18% se encuentra en situación de exclusión social.

► Los parados de larga duración representan el 53% de todos los desempleados (casi 700.000) de Madrid.

► La reducción del presupuesto regional para 2013 ha perjudicado a programas como los de atención a la discapacidad (-11%), mayores (-10%), inmigración (-35) o violencia de género (-16%).

mo paso”, explica Verónica Hansen, trabajadora social de la federación. “Buscamos empresas que quieran colaborar y enseñar a estos jóvenes, crean en ellos y les den la posibilidad de demostrar lo que valen”. “Nuestro mayor éxito es que desde el inicio del programa en 2009 tenemos en plantilla a siete chicos, y los clientes no notan que vienen de un programa social”, explica Cristina Lizarrá, directora del establecimiento.

El OEISM señala que la frontera de la exclusión ya no está tan marcada como en el pasado. “Muchas familias corrientes se han visto en la calle después de que uno o varios de sus miembros perdieran el empleo y, al dejar de pagar la hipoteca, perdieran la casa también; le puede pasar a cualquier familiar, vecino o a uno mismo cuando menos se lo espera”, explica Antonio Rivera, coordinador de empleo de la Fundación Atenea.

No solo hay jóvenes a los que ayudar a formarse y encontrar un empleo. La mayoría de personas en riesgo de exclusión son discapacitados, inmigrantes, parados de larga duración, mayores de 45 años y mujeres separadas con hijos a su cargo. Ahora que la crisis económica destruye puestos de trabajo mes a mes —en Madrid hay casi 700.000 desempleados—, las posibilidades de este colectivo son todavía más escasas que en los tiempos de bonanza, y todos dependen de la ayuda de organismos públicos y privados.

La Comunidad de Madrid cuenta dentro de sus presupuestos con diversas partidas destinadas a ayudar a estas personas. Según una portavoz de la Consejería de Asuntos Sociales, es imposible calcular el total del dinero destinado a inserción laboral porque hay muchos frentes abiertos, pero asegura que es el mismo que el año pasado. Según consta en los presupuestos para 2013, 1.249 millones de euros se invertirán en ayudar a este colectivo. OEISM denuncia que estos, sin embargo, se

han reducido un 5,30% respecto al año anterior, y que el gasto por habitante es de 192 euros frente a los 207 de 2012.

La Comunidad aún cuenta con varios programas de ayuda como la renta de inserción mínima (RMI), los comedores sociales o el servicio del SAMUR Social. En lo relativo al empleo, gestiona una red diseñada específicamente para la mujer que engloba 20 oficinas y atendió a 640 víctimas de violencia de género. El Centro de Participación del Inmigrante (CEPI) asistió en 2012 a 52.491 personas, y la feria Emplea tu Capacidad recibió en 2012 a 1.200 personas con discapacidad y alcanzó una inserción del 35%. En el apartado de subvenciones, la Consejería de Asuntos Sociales financió 68 proyectos por un importe de 246.000 euros. Se beneficiaron 19.800 personas.

La cara oculta es que los consabidos recortes también han alcanzado esta área, y han agravado la situación: a la reducción del presupuesto general, que ha perjudicado a los programas de atención a la discapacidad (-11%), mayores (-10%), inmigración (-35) o violencia de género (-16%), se une la desaparición del Programa 906 de Voluntariado y Promoción Social, cuyo fin era asegurar el mantenimiento y mejora de la red básica de servicios sociales de atención primaria. Su dotación en 2010 fue de 107 millones de euros, mientras que en 2013 se ha quedado en 848.895 euros.

Entidades sociales como la Fundación Atenea, Candelita o Secretariado Gitano alertan de que los procesos de integración son largos y costosos y cada vez hay menos presupuesto para que se completen satisfactoriamente. “Hacer nuestro trabajo es más di-

ficil que nunca”, denuncia Rivera. “Un drogodependiente no parte con las mismas condiciones que otros, ha de tener una monitorización y eso cuesta tiempo y dinero”, explica.

La iniciativa privada no llega para cubrir las necesidades de todo el mundo, pero abre el abanico de posibilidades. Un ejemplo es el Plan Incorpora de la Fundación La Caixa. En marcha desde 2006, es un programa de intermediación laboral que funciona a escala nacional y se dirige a colectivos en situación de vulnerabilidad. A día de hoy, en Madrid cuenta con una red formada por 28 entidades sociales y 464 empresas que han facilitado 1.211 puestos de trabajo en el último año. Una de ellas es Madretierra, que ayudó a salir de la calle a Julián, un dominicano de 26 años que hace sus prácticas como camarero en la cafetería del centro. “Antes de llegar aquí me pasaba el día en casa sin hacer nada y ahora tengo un trabajo que me gusta”, relata. “He aprendido a que no se me caiga una bandeja o a servir correctamente un desayuno; cuando ahora tengo pensado montar un restaurante en Miami”.

Entidades como Pinardi o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que lleva desde 1979 trabajando por la integración de población inmigrante, también forman parte de la red Incorpora. Según Beatriz Vargas, directora del área de empleo de la ONG, por sus oficinas pasaron 900 usuarios por primera vez en 2012 y se realizaron 2.200 segundas atenciones. Consiguieron una inserción del 60% y dentro de ese porcentaje se incluyen las personas que se beneficiaron del plan de la Fundación La Caixa. “Cuando nos entregan un currículo, vemos las necesidades formativas del usuario y buscamos una empresa que demande un perfil como el suyo; ahí nos valemos de este programa”, describe Vargas, quien destaca que lo más valioso que ha aportado es la capacidad de conectar en una misma red a las entidades sociales y las empresas.

Una de las firmas que contrata personal ofrecido por CEAR es Vinotium, un grupo hostelero con una docena de establecimientos que ha dado trabajo a siete inmigrantes. Una de ellas es Alejandra. Regentaba un restaurante en su país, Perú, pero huyó a España cuando el grupo terrorista Sendero Luminoso empezó a campar a sus anchas por su región y ella vio su seguridad amenazada. Vendió su negocio, dejó a sus dos hijos con unos familiares y viajó a Madrid en 2007. “Trabajé limpiando pisos y oficinas, pero poco después de traer a mis niños me quedé sin nada. No podía ni dormir pensando en ellos y en de dónde iba a sacar dinero”, relata.

Alejandra forma parte del colectivo de parados de larga duración, que representa un 53% de todos los desempleados de Madrid. Pero tuvo suerte: visitó CEAR siguiendo el consejo de una amiga y al cabo de cuatro meses consiguió una entrevista de trabajo en Vinotium. Ya lleva casi ocho meses como limpiadora y ahora ve el futuro con otros ojos. “Ahora por lo menos puedo dormir y ya no estoy estresada”.